

EL NUEVO CURSO


TRCI

**TENDENCIA POR LA RECONSTRUCCION DE LA IV INTERNACIONAL
CORRIENTE OBRERA REVOLUCIONARIA**

COR



UN GOBIERNO DE REACCION

Fernández o Petro, debe tener discursos y gesticulaciones para el despliegue de la política gatopardista, de cambiar algo para que nada cambie. Así es como hablan de tener una “agenda de transformaciones estructurales” abanderada por las alas izquierda de militantes gesticuladores del PC, el FA, etc.

Así proponen mayor financiamiento en salud para reducir las listas de espera, manteniendo la precariedad de hospitales y centros de salud; una reforma de pensiones que aumente miserable y gradualmente las pensiones respaldando a las AFP cambiándoles de nombre; un aumento en los subsidios a las constructoras en crisis, emulando un plan de viviendas, mientras acentúa el desalojo violento de las familias en las tomas; una ley de reducción a 40 horas laborales que lejos de apuntar al bienestar de las familias trabajadoras, propone un incremento de la flexibilización laboral, la intensificación de la producción y la disminución de los salarios; un crecimiento insignificante del presupuesto en infraestructura educativa y becas de alimentación profundizando la segregación educativa de escuelas para pobres y escuelas para ricos, etc.

El carácter pérfido de esta “agenda de transformaciones” no hubiera sido distinto de haber ganado el “apruebo” en el plebiscito constituyente, aunque sí hubiera sido presentado por el gobierno con una mayor pomposa autocomplacencia. Por el contrario, el gobierno avanza copado por el personal de confianza del imperialismo, con el bacheletismo y el laguismo en la primera fila, y se reclama que ante la actual “relación de fuerzas” debe postrarse ante las exigencias de la oposición de derecha.

Eso sí, su objetivo, como con la frustrada nueva constitución, sigue siendo intentar cerrar temas ante las masas. La cocina política aspira contentar a los huérfanos de la reforma estatal con una nueva farsa constituyente, de difícil realización, donde un “comité de expertos” consensuado por la charlatanería parlamentaria, bregará para que ningún cambio vaya a debilitar la explotación capitalista, la propiedad privada de los medios de producción, el dominio del capital financiero y la esencia represiva del aparato estatal que lo sustenta.

Poco importan estas composturas políticas para los fines de recostar al aparato estatal ante el imperialismo. Pronto, con o sin “side-letters” (cartas laterales), se consagrará el avance en la semicolonización con la firma del TPP-11, así como con las políticas de explotación de recursos naturales como con el hidrógeno verde (proyecto nombrado ridículamente “resiliente e inclusivo”) para el que ya han comprometido créditos el BID y el Banco Mundial.

> > >

Boric visitó la Araucanía con un ostentoso despliegue militar y policial, con cientos de carabineros, francotiradores, tanquetas, zonas liberadas, control aéreo, etc, etc. Esa visita estuvo muy lejos de las simuladas puestas en escena donde aparece rodeado por adultos mayores o niños, emulando apoyo del pueblo. El terreno ya estaba preparado por la undécima prórroga parlamentaria al estado de excepción en zona perpetuando su militarización.

Aupado por el general Yañez - responsable de los asesinatos, mutilaciones, torturas, que se dieran durante la semiinsurrección de Octubre del 19- se reunió con los distintos representantes patronales, “agricultores”, cámaras empresarias, gremios camioneros, etc- para hablar de “terrorismo”, “paz”, “estado de derecho”. Estos gestos, junto al mantenimiento de presos políticos, el hostigamiento a las comunidades mapuches, la represión desatada contra la juventud estudiantil, etc, pretenden dar tranquilidad al capital financiero de que la esencia represiva del aparato de estado se mantiene incólume.

Es desde aquí donde se para la coalición gobernante para impulsar un “gran acuerdo nacional por la seguridad”, donde todas fuerzas políticas burguesas y pequeñoburguesas del régimen, cierran filas para desplegar los ataques contra la clase trabajadora y el pueblo. Ya lo delinea el presupuesto 2023 que junto con hacer recortes en diversas áreas, destaca el aumento histórico de financiamiento para mayor dotación y equipamiento a carabineros y fuerzas policiales. La orientación represiva de la política del gobierno es clara, como cuando la ministra del interior indicó la necesidad de que carabineros cuenten con armas automáticas para uso a discreción.

Pero, por supuesto, un gobierno que posa de izquierda, o que pretende cuadrarse con los gobiernos de contención en la región, alineados con el imperialismo, como el de Lula,

EN ESTE NÚMERO:

REFORMA DE PENSIONES
IMPULSEMOS UN ENCUENTRO DE LA JUVENTUD OBRERA Y ESTUDIANTIL
POST ELECCIONES EN BRASIL

> > > También el FMI, para la tranquilidad del empresariado y el capital financiero, ha monitoreado y dado su bendición a la política presupuestaria del gobierno, abriendo al mismo tiempo una línea de crédito de libre disposición de U\$ 18,5 mil millones de “carácter precautorio”. Vale decir, que ante el desarrollo de la crisis, la inflación, un 2023 recesivo, aumento en la desocupación, la persistencia y profundización del deterioro de las condiciones de vida de la población, deberán tener a mano recursos de contención para responder a aquello que no pueda ser resuelto por la vía de la represión. Las “volteretas” del gobierno no se deben a una abstracta “relación de fuerzas” entre las tendencias del régimen, y menos a la salud mental de Boric o a su amarillismo, corresponden a su carácter bonapartista que al profundizarse las crisis y descomposición del capitalismo mundial, al agudizarse la lucha entre las clases fundamentales del país semicolonial, entre el proletariado y el capital imperialista. Éste gobierno se posiciona sobre los intereses de las clases en pugna recurriendo a la institucionalidad militar para doblegar con dobles cadenas a la clase obrera y el pueblo profundizando al mismo tiempo la crisis en el semiestado, en una situación de una fuerte ofensiva de la burguesía sobre el conjunto de los explotados.

La base pequeñoburguesa del gobierno, en un proceso acelerado de pauperización busca salidas de reformistas y de solución de fuerzas siguiendo a la rastra a la gran burguesía, ante la parálisis del proletariado dada su debilidad en conciencia y organización. Es aquí donde sectores del activismo y de la izquierda revolucionaria se pierden por completo al creer que estas oscilaciones son la expresión de una lucha “contra la derecha” o “contra el fascismo” y se colocan en la fila de la exigencia al gobierno reclamándoles consecuencia (ya el alcalde Jadue pretende salvaguardar este seguidismo y la desmoralización de las filas del PC llamando a crear “frentes antifascistas”). Se desesperan con impotencia por conquistar un espacio en la superestructura de la democracia burguesa semicolonial, bregando por su reforma y abandonando la lucha por la independencia política de la clase obrera. Se cumplieron tres años de la huelga general del 12 de Noviembre donde la clase obrera, de forma espontánea pero contundente, desorganizó a la burguesía propiciando la salida desesperada del acuerdo constitucional del 15N por la paz y el orden público para salvar a Piñera y a todos sus sostenedores. A poco de asumir el gobierno de Boric aprobó presuroso la ley Piñera de infraestructura crítica para militarizar los puertos, las minas, los hospitales, intentando conjurar nuevas intervenciones potentes del proletariado ante la crisis desatada.

Es menester de la vanguardia obrera y juvenil preparar nuestras fuerzas para organizar a nuestra clase y dar una pelea contra el gobierno, la patronal y el imperialismo. Las luchas de los trabajadores portuarios, de la salud o de decenas de negociaciones colectivas, pueden avanzar decididamente en desarrollar el control obrero de los medios de producción y en levantar un programa para la intervenir en la actual crisis preparando un Congreso de delegados de base de la clase obrera que ponga de pie a nuestra clase contra el ataque patronal en curso■

REFORMA DE PENSIONES

UN SI + AFP

PARA SEGUIR EXPROPIANDO EL SALARIO DE LA CLASE TRABAJADORA

El gobierno ha presentado un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, ante la decadencia del sistema de las AFP, lo que llevó a sectores de masas a movilizarse en años anteriores por las miserables pensiones dadas a los trabajadores retirados.

El sistema de capitalización individual de las AFPs impuesto en la dictadura militar no es más que un sistema de expropiación de una fracción del salario obrero, donde las AFPs son parte del capital financiero donde especulan con el salario de los trabajadores, dineros frescos que constituyen el respaldo material de las AFPs.

La propuesta del gobierno viene a cambiar el nombre a las AFPs, traspasando algunas funciones a un órgano estatal APA (Administrador Previsional Autónomo). Las actuales AFP cambian de nombre al de Inversores de Pensiones Privado (IPP) que se dedicaran a rentabilizar los ahorros de los trabajadores en el “mercado financiero”, ahora se le incorporaría otro “competidor”, estatal en esta apropiación de los salarios (10,5 % de este) llamado

un “impuesto al trabajo” o que es recesivo, o que afectaría a las pymes superexplotadoras subordinadas al gran capital. Recordemos que en su momento el expresidente de la CPC, Alfonso Swett indicó que no tenían gran problema con este 6% ya que lo iban a resolver con algo más de 200 mil despidos. Es decir el 6%, no viene de las ganancias capitalistas, sino de una fracción de plusvalor producido por la clase trabajadora y que será pagado con despidos, disminuciones salariales e inflación. Para los capitalistas quienes son los que mantienen los salarios de hambre, la desocupación, el trabajo en negro, etc, los trabajadores retirados no son más que una máquina vieja o averiada cuyo costo se debe asumir, mediante la extracción de mayor plusvalía.

En sectores de la clase obrera existe la idea de que los fondos no serían de su propiedad, pero es más una idea que caló más como defensa de lo poco o nada de bienes que tiene una familia obrera. Distinto al cinismo de la burguesía que defiende la libertad de hacer jugosas ganancias con la explotación.



Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA).

Como gancho para su aprobación se propone un aumento de la PGU de los actuales \$195 mil a \$250 mil, eso sí de forma gradual para que sea licuado por la inflación. En su alocución Boric dio algunos ejemplos (falsos) del potencial aumento de pensiones, donde subirían entre un 40 y 55% de las pensiones actuales. Es lo que plantea el proyecto que de ser aprobado podría materializar este aumento en la pensión de un trabajador dentro de... 40 años!.

Además se creará un fondo integrado de pensiones correspondiente al 6% de las remuneraciones de “carga” del empleador. Ésta es la famosa contribución “solidaria” con la que sectores empresariales y parlamentarios de derecha graznan exigiendo la libertad para elegir, difundiendo la falsa idea de que los desposeídos podemos (ilusoriamente) tener algo. Este 6% no es ni de “carga” del empleador ni mucho menos “solidario”. Ya salió el coro de economistas burgueses a reclamar que éste es

La reforma previsional ingresado por el gobierno de Boric, resulta ser una nueva tentativa distribucionista y estatista, donde los nuevos entes “públicos” a cargo del IPS, subcontratarán a los agentes inversionistas, para buscar darle oxígeno al sistema financiero, así contener la crisis social provocada por el anárquico sistema capitalista. Los cantos de sirena del sistema de reparto y su falso enfrentamiento al de capitalización individual, encubren la realidad de una sociedad capitalista para la que el trabajador retirado es sólo un traste.

En este contexto se hace más que necesario discutir un programa obrero de salida la crisis, para lo cual los sindicatos bancarios y del sistema financiero deben jugar un rol importante para enfrentar e imponerle el control obrero a las patronales de la rama, luchando por una pensión acorde al costo de vida del trabajador retirado y luchando por su derecho a la salud, al transporte, a la vivienda y a la recreación■



Durante este año la juventud secundaria hemos dado importantes batallas, levantándonos contra las precarias condiciones de estudio, deplorables infraestructuras, mala alimentación, falta de materiales, falta de presupuesto, contra la discriminación, por protocolos para defender a nuestras compañeras, etc. Al mismo tiempo hemos retomado la lucha que abriera la semiinsurrección del 18 de Octubre del 19, donde la juventud, saltando molinetes y enfrentando a la represión de Piñera, fue la chispa que desató la intervención de amplios sectores de la clase obrera y el pueblo.

En nuestra lucha exigimos también la libertad de los presos por luchar, levantamos y solidarizamos con las luchas de los trabajadores de la educación, enfrentamos la política del gobierno de Boric, del ministerio de educación y de los municipios de "mesas de trabajo" de manos vacías, mientras desataba una furiosa represión, continuando con la obra de Piñera de defender la educación burguesa. Así vivimos en carne propia la orientación del gobierno de colocar el llamado "diálogo" como un fin y la represión de nuestra lucha y persecución contra la organización estudiantil como el medio para imponerlo. El respaldo al accionar represivo del estado ha sido total por parte del gobierno, y es que el gobierno busca mantener aceitado el aparato represivo del Estado.

Realizamos masivas marchas luego de fracasada la farsa constituyente para señalar que nada ha cambiado y que retomamos las luchas educativas de las generaciones anteriores, en medio de una profundización de la crisis y la descomposición del capitalismo que deja en evidencia que este sistema no tiene otro futuro que ofrecer a la juventud que el de la miseria y la explotación.

En distintos liceos se vienen dando ataques a la organización estudiantil. Lo vemos directamente con el accionar de las policías, reprimiendo duramente las manifestaciones estudiantiles, encausando a jóvenes luchadores. Ante cada lucha estudiantil, con tomas de colegios, asambleas, movilizaciones, la respuesta ha sido intensificar la represión, con un mayor equipamiento de carabineros, con golpizas, detenciones arbitrarias de compañeros y compañeras, montajes de causas judiciales, el ingreso de pacos en los recintos educacionales, la puesta de cámaras de seguridad y utilización de drones en nuestros liceos para perseguir y criminalizar

a la juventud que lucha. . Además, la intromisión de los directores de los colegios en la organización estudiantil, las expulsiones de estudiantes, sumarios, etc.

También las instrucciones del gobierno y los municipios hacia los directivos de las escuelas ha sido la de la utilización de la ley de aula segura que se usó para imponer la expulsión de estudiantes, en sumarios o procedimientos amañados y sin apelación.

Habiendo perdido semanas y meses de educación por la pandemia, se dieron el lujo de cerrar nuestras escuelas imponiendo la educación virtual, a la que hijos de la clase obrera no tenemos acceso por las condiciones cada vez más crítica de la crisis social, y esto con el sólo objetivo de impedir la organización y lucha estudiantil.

Así podemos tomar el caso de la expulsión de dos estudiantes del liceo Carmela Carvajal por el hecho de impulsar y dirigir asambleas culpabilizando por un supuesto "caos" al interior del liceo.

O como los estudiantes del liceo Lastarria que por posar en una foto con una bandera del FPMR, están en proceso de expulsión en una clara persecución y proscripción política contra los estudiantes que recuerda los métodos persecutorios de la dictadura, continuados con otras formas en la democracia burguesa.

Las amenazas de expulsiones o repeticiones de año para impedir nuestra lucha han sido moneda corriente.

Todo lo anterior marca una línea clara del gobierno en orden a disciplinar a un sector que no ha se subordinado al gobierno de Boric, que mantenido las banderas por la Libertad de los Presos por luchar y el derecho a la educación.

Es necesario que fortalezcamos nuestras organizaciones y que agrupemos a todo el activismo de la juventud para discutir un programa de lucha y mantener el pulso de nuestras acciones.

Mocionemos en cada asamblea, reunión de centro de alumnos y organización secundaria, la convocatoria de un Encuentro de la juventud obrera y estudiantil que pueda debatir abiertamente la situación de la juventud, la necesidad de organizarnos y continuar la lucha contra el gobierno, la educación burguesa y la ofensiva imperialista. La creación de una juventud revolucionaria internacionalista, que pelee por la revolución socialista mundial está a la orden del día■

> > > de estas manifestaciones, limitándose a hacer dudosas declaraciones sobre el respeto al proceso de transición y la legitimidad de las protestas que cuestionan el resultado.

El proceso de transición comenzó oficialmente con el nombramiento de Geraldo Alckmin, vicepresidente de Lula, por parte del ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, al suponer el tamaño del agujero en las arcas públicas que dejará el actual gobierno. Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas de los gobiernos del PT y considerado por el mercado como el ministro de Economía del nuevo gobierno, declaró que el agujero estimado por organizaciones independientes es tres veces mayor que el declarado por el gobierno, acercándose a los 400.000 millones de reales. Con ello, defiende la flexibilización fiscal para el inicio del mandato y una reforma administrativa "bien hecha". Alckmin ya está negociando con el ponente del presupuesto, Marcelo Castro (MDB), un PEC de "Transición" para eliminar del techo de gastos los gastos "inaplazables" y para los que no hay recursos disponibles para el próximo año, entre los que se encuentran las promesas de campaña de Lula, como el mantenimiento de la ayuda de 600 reales, recursos para almuerzos escolares, reajuste del salario mínimo, ingresos para programas de salud como la Farmacia Popular, entre otros.

La política independiente de la clase obrera, con la defensa de nuestras pautas, en sí misma, es la oposición y el enfrentamiento directo no sólo contra las manifestaciones de la pequeña burguesía de Bolsonaro, sino principalmente contra la política del Estado burgués en su crisis histórica, que, bajo cualquier gobierno, avanzará sobre nuestra clase. Se ha establecido que, con el brutal endeudamiento público, con la caída histórica de la productividad y de la inversión, el gobierno de Lula, aliado con la burguesía, tendrá que profundizar las reformas que imponen una mayor relación de explotación del capital sobre el trabajo, bajo la total connivencia de las direcciones que blindarán el gobierno como forma de defensa de la "democracia". Al defender la intervención proletaria en el respeto a la democracia y a los resultados de las elecciones, las direcciones políticas y sindicales dan carta blanca al gobierno de Lula para hacer la transición con el gobierno de Bolsonaro sin más inconvenientes.

Es necesario, por lo tanto, plantear en cada organización sindical y estudiantil la necesidad de realizar asambleas que exijan a las centrales sindicales la realización de un congreso de delegados elegidos por las bases para construir un plan obrero para salir de la crisis y enfrentar los ataques; para deponer las reformas laboral, previsional, educativa y administrativa; para plantear la lucha por la escala móvil de horas y salarios y la necesidad de expropiar a los expropiadores. También es necesario que, desde nuestras estructuras, organicemos la autodefensa contra los ataques protofascistas de la pequeña burguesía bolsonarista, y especialmente contra el brazo armado del Estado burgués.

*Liga Operaria Internacionalista, Brasil,
en www.trci-web.org, digital.org, 06/11/2022*



POST ELECCIONES EN BRASIL

ORGANIZAR NUESTRA INTERVENCION INDEPENDIENTE Y CLASISTA!

Una semana después de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales, con la victoria de Lula sobre Bolsonaro para la presidencia, la transición gubernamental comienza a diseñarse en medio de las protestas de Bolsonaro, la disputa por el presupuesto de 2023, las negociaciones y los reordenamientos parlamentarios para construir la gobernabilidad en la democracia burguesa semicolonial brasileña.

Desde que Lula salió de la cárcel a finales de 2019, el petista ya era el candidato definitivo para las elecciones de 2022, sin apenas oposición dentro del propio partido. El tiempo que siguió a su liberación fue utilizado para la consolidación del Frente Amplio en torno a su nombre y también para la reconstrucción de los vínculos entre el PT y las facciones burguesas que habían participado en sus gobiernos anteriores, pero que abandonaron al Partido de los Trabajadores debido a la lentitud para aprobar el paquete de reformas necesarias para que mantuvieran o recuperaran sus márgenes de ganancia.

Los pésimos resultados económicos del gobierno de Bolsonaro, aún con la aplicación y profundización de varias de estas reformas, sumados a la desastrosa gestión de la pandemia, hicieron que el gobierno perdiera fuerza con algunas fracciones de la burguesía, especialmente la industrial, y fortaleció aún más al “centrão” ante la débil gestión de Bolsonaro. La derrota electoral de Trump en Estados Unidos también fue un duro golpe para esta administración, ya que Trump era el principal vínculo de Bolsonaro con el imperialismo.

En esta coyuntura, y con Lula coqueteando abiertamente con los sectores más vinculados ideológicamente a Bolsonaro, como las iglesias evangélicas, el gobierno no tuvo más remedio que utilizar todo el poder de la maquinaria estatal en su intento de reelección, junto con su poderoso aparato de producción y difusión de propaganda y fake news. Bolsonaro retiró dinero de sectores estratégicos y provocó un enorme agujero en las cuentas, desviando ese dinero al “presupuesto secreto”, una forma de asignar dinero público a los diputados de su base para que realicen obras o actividades para comprar votos en sus bases electorales. También extendió las transferencias a las prestaciones sociales, con el llamado “PEC kamikaze”, que creó un estado de emergencia para maniobrar la legislación electoral.

Aun así, por primera vez en la historia electoral de Brasil, un presidente no fue reelegido. Esto se debe a que el aparato estatal, en una democracia burguesa, siempre se utiliza para el mantenimiento de la fracción burguesa que ocupa el gobierno. Bolsonaro no fue una excepción a la regla; la novedad fue que no tuvo éxito. Incluso con el gobierno recurriendo violentamente a todos estos recursos, las elecciones fueron ganadas por el candidato del PT. La diferencia de votos entre los dos candidatos en la segunda vuelta fue de dos millones. Después de perder por un estrecho margen en la mayoría de las regiones, Lula ganó por un amplio margen en los estados del Nordeste y también ganó por un estrecho margen en Minas Gerais, la segunda mayor región electoral después de São Paulo.

Tan pronto como se anunció el resultado, Biden y Macron salieron inmediatamente a felicitar a Lula por su victoria, seguidos por otros líderes del imperialismo mundial y los gobernantes de América Latina, demostrando que el gobierno de Lula servirá bien a los intereses imperialistas en la región. Tampoco tardó mucho tiempo en que gran parte de las bases bolsonaristas desembarcaran ya de su gobierno, haciendo señas al siguiente gobierno para que gestionara sus asuntos. El gobernador electo de São Paulo, aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no tardó en expresar su interés en

colaborar con el gobierno federal. Las iglesias evangélicas, que fueron el principal soporte ideológico del bolsonarismo en las periferias, ya se han pronunciado, a través de líderes como Silas Malafaia y Edir Macedo, para que se reconozcan y respeten los resultados de las elecciones burguesas. Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal, ha llegado a afirmar que hay que perdonar al PT por sus errores. El “centrão” parlamentarios también dieron la bienvenida al nuevo gobierno, con figuras como Rodrigo Maia (ex presidente de la Cámara de Diputados) y Arthur Lira (actual presidente de la Cámara), felicitando al nuevo/viejo presidente e iniciando la negociación de posiciones de apoyo al gobierno del PT.

Por último, quedó la desesperación de la pequeña burguesía y de algunos empresarios bolsonaristas “radicalizados” por la máquina de profusión de “fake news” de Bolsonaro. Creyendo que hubo algún tipo de trampa en el proceso electoral, y que su presidente Jair Bolsonaro es el ganador de facto, se han lanzado a ocupar avenidas y carreteras en señal de protesta, deseando de alguna manera revertir los resultados de la elección. Anhelan un recuento de votos y también piden a las Fuerzas Armadas que garanticen el orden por las armas. Tan embriagados están en su delirio que no se han dado cuenta de que el propio imperialismo lleva tiempo señalando que Bolsonaro ya no sirve a sus intereses y, por tanto, no hay la más mínima posibilidad de que se produzca ninguna acción de este tipo. El propio vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, trató de calmar los ánimos de los manifestantes, que apelan a las Fuerzas Armadas para una intervención, afirmando que esa acción pondría a Brasil en una “situación difícil ante la comunidad internacional” y que la resistencia al gobierno de Lula debe realizarse de forma política.

Ante los cierres de carreteras por parte de camioneros, empresarios y la pequeña burguesía bolsonarista, las organizaciones centristas defienden la intervención “independiente” del proletariado para despejarlas y la autodefensa como política ante manifestaciones y actos de carácter fascista, por el respeto a la democracia y al resultado electoral. Es una burla pretender que la intervención proletaria en defensa de la democracia (burguesa) o el respeto a los resultados electorales, después de haber defendido la participación en las elecciones y el voto a Lula, sea una política de clase independiente. Más aún cuando el cierre de carreteras es una de las formas de manifestación y lucha obrera, ya que impide la circulación de mercancías y afecta a la producción, junto con las ocupaciones de fábricas, centros de trabajo y de estudio. Si la pequeña burguesía se sirve de los métodos históricos de lucha de la clase obrera para defender los intereses de una fracción de la burguesía, es necesario que los trabajadores impongan sus intereses y levanten sus banderas de clase en contrapunto político y no atacando el propio método.

Los pobres, los trabajadores y las hinchadas organizadas han demostrado que la acción directa contra los bloqueos bolsonaristas debe tener lugar y estar relacionada con sus intereses, como su propia circulación y la defensa contra los ataques cobardes. Sin embargo, no es tarea de la clase obrera garantizar la circulación y reproducción del capital, esta garantía la ejerce generalmente el brazo represivo del Estado burgués, que es la policía. Tanto es así que la justicia y los gobiernos estatales no tardaron ni un día en ordenar el desbloqueo de las carreteras, incluso con el uso de la fuerza, y el propio Bolsonaro tuvo que dar la cara y decir que el bloqueo de las carreteras es “una cosa de izquierdas”, pidiendo a los manifestantes que utilizaran otros métodos. Aislado y a pesar de no reconocer formalmente la victoria de Lula, Bolsonaro no se ha puesto al frente

< < <